



**REPÙBLICA DE COLOMBIA**  
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÙBLICO**  
**JUZGADO SÈPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE CUCUTA**  
**NORTE DE SANTANDER**

San JosÈ de Cùcuta, veintinueve (29) de julio de dos mil veinte (2020)

**REF: PROCESO ORDINARIO - REIVINDICATORIO**  
**RADICADO: 54-001-31-53-006-2011-00193-00**  
**DEMANDANTE MISAEL PEÑA VARGAS Y OTROS**  
**DEMANDADO: MANUEL MELEÑO Y OTROS**

**I. ASUNTO**

Se encuentra al Despacho el presente proceso, luego de haberse recibido por parte del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cùcuta. En atenci3n a la decisi3n proferida por dicha Unidad Judicial, en auto del 17 de junio de 2019, mediante el cual se dispuso la declaratoria de la nulidad prevista en el artìculo 121 del C.G.P. Disponiéndose por ende la remisi3n del proceso a este Despacho Judicial, por ser el siguiente en turno.

En ese sentido seria del caso proceder a avocar el conocimiento del asunto, si no se advirtiera la necesidad de formular conflicto negativo de competencia, con base a las siguientes consideraciones.

**II. CUESTI3N PREVIA**

Previo a referir los argumentos que seràn analizados en esta etapa procesal, es del caso seàalar que, el presente proceso se recibì el pasado 25 de junio de 2019, fecha desde la cual ciertamente ha transcurrido un excesivo termino para emitir el pronunciamiento contentivo al conocimiento del asunto, sin embargo la suscrita debe precisar que tan solo desde el pasado 16 de enero del año que avanza, tomo posesi3n como titular del Despacho, no siendo por ende atribuible la mora antes descrita, y respecto del cual ya se dio inicio a las acciones disciplinarias del caso.

**III. CONSIDERACIONES**

La competencia no es otra cosa que a manera como la ley asigna y distribuye el trabajo judicial para los casos concretos entre los varios jueces o tribunales de una misma jurisdicci3n, con tal fin el legislador ha tomado en consideraci3n distintos factores, para la asignaci3n de los referidos procesos.

Bajo los postulados del artìculo 29 de la Constituci3n Polìtica Colombiana, en concordancia con el artìculo 2º del C.G.P., se tiene que toda persona tiene derecho a la tutela judicial efectiva para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses, con sujeci3n a un debido proceso de duraci3n razonable.

En razón a lo anterior, el estatuto procesal civil, estableció reglas atinentes a la duración del proceso, dependiendo de la instancia en que se desarrolla. Estableciendo igualmente la fórmula de computar este término y la sanción en caso de incumplimiento.

Tales reglas, están consignadas en el artículo 121 del C.G.P. que prevé: “Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. (...)”

Ahora, honrando el desarrollo legal del derecho consagrado en el artículo 2° del C.G.P., que concede a toda persona acceder a la administración de justicia, y cuyo aparte final preceptúa que: “Los términos procesales se observaran con diligencia y su incumplimiento injustificado será sancionado,” así como el carácter público de las normas procesales, que las hace de obligatorio cumplimiento conforme emanada del artículo 13 ibídem, la nueva codificación contemplo en los inciso 2° y 6° del artículo 121, la consecuencia jurídica frente al vencimiento del plazo para dirimir la instancia así:

Vencido el respectivo término previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual, al día siguiente, deberá informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien asumirá competencia y proferirá la providencia dentro del término máximo de seis (6) meses. La remisión del expediente se hará directamente, sin necesidad de reparto ni participación de las oficinas de apoyo judicial. El juez o magistrado que recibe el proceso deberá informar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura sobre la recepción del expediente y la emisión de la sentencia.

(...)

Será nula de pleno derecho la actuación posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia.

En el caso de marras, la demanda se presentó el día 29 de julio de 2011 (folio 10), dándose a la misma el trámite del proceso ordinario dispuesto en el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil, conforme se desprende del auto admisorio del 3° de agosto de 2011 (folio 26). Sin embargo, en auto del 29 de agosto de 2018, el Juzgado 6° Civil del Circuito, dispuso la conversión del proceso a las nuevas estipulaciones del C.G.P. Ello, en atención a que en auto del 6° de diciembre de 2017 se había efectuado el decreto de pruebas. Pudiéndose por ende aplicar lo dispuesto en el literal a) del artículo 625 del C.G.P.

Es así, que el compute del termino previsto en el artículo 121 del C.G.P., inicia a contabilizarse a partir del momento en que al proceso el e eran aplicables las estipulaciones de la nueva reglamentación procesal, es decir a partir del 6 de diciembre de 2017. Por tanto, ciertamente el plazo para dirimir la primera instancia, feneció el 6 de junio de 2019, incluyendo la prórroga usada por el Juzgado 6° Civil del Circuito.

No obstante, lo anterior, conocido es por los actores del sistema judicial que, tras presentarse casos que suscitaron su aplicación, se originaron múltiples debates, incluso en las altas corte, con relación al factor que debía imperar en la interpretación del precepto estudiado, dando lugar básicamente a dos tesis; por una parte, aquella que favoreció el parámetro objetivo, verbigracia la Sentencia STC233-2019 de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil. Contrario sensu, se erigió la postura esgrimida en el escenario constitucional, Sentencia T-341 de 2018 que optó por el factor subjetivo.

Finalmente, la posición fue compartida por la Sala de Casación Civil en sentencia STC-126602019 (11001020300020190183000) del 18 de septiembre de 2019, en donde se determinó que el termino previsto en el artículo 121, no opera de manera automática y por ende previo a su declaratoria se debe analizar:

- i) La verificación de otros factores razonables que permiten verificar por qué el fallador incumplió dicho termino.
- ii) Se debe tener en cuenta “la congestión judicial que agobia a la Rama Judicial en nuestro país, situación que no puede ser atribuible al funcionario”.

En consecuencia, con lo señalado, en consideración de esta judicatura justamente la variación de los criterios referenciados permite ahora aplicar los efectos de la Sentencia C-443 del 25 de septiembre de 2019, que con relación a la constitucionalidad de la norma resolvió:

**“PRIMERO.- DECLARAR LA INEXEQUIBILIDAD** de la expresión “de pleno derecho” contenida en el inciso 6 del artículo 121 del Código General del Proceso, y la **EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA** del resto de este inciso, en el entendido de que la nulidad allí prevista debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, y de que es saneable en los términos de los artículos 132 y subsiguientes del Código General del Proceso.

**SEGUNDO.- DECLARAR LA EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA** del inciso 2 del artículo 121 del Código General del Proceso, en el sentido de que la pérdida de competencia del funcionario judicial correspondiente sólo ocurre previa solicitud de parte, sin perjuicio de su deber de informar al Consejo Superior de la Judicatura al día siguiente del término para fallar, sobre la circunstancia de haber transcurrido dicho término sin que se haya proferido sentencia.

**TERCERO.- DECLARAR LA EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA** del inciso 8 del artículo 121 del Código General del Proceso, en el sentido de que el vencimiento de los plazos contemplados en dicho precepto no implica una descalificación automática en la evaluación de desempeño de los funcionarios judiciales.”

En efecto y acorde con el sentido demarcado por la Corte Constitucional, al zanjar la discusión que, desde el comienzo de su vigencia, ofreció la norma estudiada, es claro que, la declaratoria de perdida de competencia debe ser precedida de un pedimento de parte y no de oficio.

En ese orden de ideas, esta Judicatura considera que, al no existir petición de parte en el asunto, relativa a que se declarará la perdida de competencia en el proceso que hoy nos convoca, no era por ende pertinente declarar la misma, como fue hecho por el Juzgado 6° Civil del Circuito de Cúcuta.

Aclarándose en este punto, que el Despacho no desconoce que el precepto constitucional traído a colación, fue proferido con posterioridad a la declaratoria de

perdida de competencia. No obstante, la misma tiene plenos efectos en la actualidad. Y como quiera que el Despacho pese a la remisión del proceso, no había avocado el conocimiento del mismo, se considera necesario actuar conforme a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional.

De lo anterior, fluye la falta de competencia de esta judicatura, en el asunto, imponiéndose el deber de formular conflicto de competencia negativo. Disponiéndose igualmente la remisión de las presentes diligencias a la Sala Civil-Familia del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, para lo de su cargo (artículo 139 del C. G. del P). En mérito de lo expuesto, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cúcuta,

**RESUELVE:**

**PRIMERO: ABSTENERSE** de asumir el conocimiento del asunto, por falta de competencia.

**SEGUNDO:** Como consecuencia de lo anterior promover el **conflicto negativo de competencia**.

**TERCERO: REMITIR** el expediente a través de la oficina de apoyo judicial, al Honorable Tribunal del Distrito Judicial de Cúcuta –Sala Civil Familia- a fin de que se resuelva el conflicto de competencia, conforme lo consagra el artículo 139 del C.G.P. Oficiése y déjense las constancias del caso sobre la salida del expediente.

**CÓPIESE Y NOTIFÍQUESE**

**FIRMA ELECTRÓNICA  
ANA MARIA JAIMES PALACIOS  
JUEZ**

CT/AMJP

**Firmado Por:**

**ANA MARIA JAIMES PALACIOS  
JUEZ CIRCUITO  
JUZGADO 007 CIVIL DEL CIRCUITO CUCUTA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**36b1c523abc1c98504801570bc0dd78b29fed82c5b302395a7d53e  
dab60aad6f**

Documento generado en 29/07/2020 12:10:46 p.m.